



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 07639-2005-PA/TC

ICA

VÍCTOR GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Gabriel Hernández Hernández contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 69, su fecha 1 de julio de 2005, que declara improcedente *in limine* la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de febrero de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables la Resolución N.º 0000054763-2004-ONP/DC/DL 19990, de fecha 4 de agosto de 2004, y la notificación de fecha 26 de octubre de 2004, mediante las cuales se dispuso la suspensión de su pensión de jubilación adelantada; y que, en consecuencia, se reponga la pensión que venía percibiendo y se ordene el pago de las pensiones dejadas de percibir desde la fecha de suspensión, más los intereses legales, costos y costas.

El Segundo Juzgado Civil de Ica, con fecha 7 de febrero de 2005, declara improcedente *in limine* la demanda, por considerar que existe una vía igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional invocado.

La emplazada no contesta el traslado de la apelación.

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. La demanda ha sido rechazada liminarmente, tanto en primera como en segunda instancia, por considerar que conforme al inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, el proceso contencioso administrativo constituye la vía procedimental específica, igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional vulnerado.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2. Sobre el particular, debemos señalar que en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que constituye precedente, este Tribunal ha establecido que cuando se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital, la pretensión demandada es susceptible de protección mediante el proceso constitucional del amparo, como sucede en el caso de autos.
3. Por tal motivo, y habiéndose puesto en conocimiento a la emplazada el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda, conforme lo dispone el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida.

Delimitación del petitorio

4. En el presente caso el demandante solicita que se deje sin efecto la suspensión de su pensión de jubilación adelantada, y que, en consecuencia, se le abonen las pensiones dejadas de percibir. Al respecto, este Colegiado considera pertinente señalar que la suspensión de la pensión de la que ha sido objeto el demandante indudablemente lo priva del mínimo vital necesario para su subsistencia, lo que determina que se vea imposibilitado de cubrir sus necesidades básicas, atentándose en forma directa contra su dignidad.

Análisis de la controversia

5. De la revisión de autos se advierte que, mediante la Resolución N.º 31947-1999-ONP/DC, de fecha 29 de octubre de 1999, se le otorgó al demandante una pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990, y a través de la Resolución N.º 0000054763-2004-ONP/DC/DL 19990, de fecha 4 de agosto de 2004, se suspendió el pago de la pensión de jubilación del demandante.
6. Al respecto, debemos señalar que del segundo considerando de la resolución cuestionada se desprende que la ONP dispuso suspender el pago de la pensión de jubilación adelantada del demandante porque consideró que se encontraba incurso en la causal de suspensión prevista en el artículo 45 del Decreto Ley N.º 19990.
7. En efecto, según el artículo 45 del Decreto Ley N.º 19990, antes de ser modificado por la Ley N.º 28678, resultaba incompatible la percepción de una pensión de jubilación por un pensionista que hubiese sido asegurado obligatorio o facultativo a que se refiere el inciso b) del artículo 4, con el desempeño de un trabajo remunerado para cualquier empleador o en cualquier empresa de propiedad social, cooperativa o similar.
8. Sobre el particular, debemos señalar que en la resolución cuestionada únicamente se invoca el artículo 45 del Decreto Ley N.º 19990, y amparándose en ello la emplazada suspendió el pago de la pensión de jubilación del demandante, sin que mencione en qué empresa supuestamente habría estado trabajando éste para que opere dicha

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

incompatibilidad. Asimismo, la emplazada no ha probado la incompatibilidad que alega para suspender la pensión del demandante. En tal sentido, la suspensión de la pensión ha sido carente de motivación y ejecutada de manera arbitraria, con lo que se ha afectado el derecho al mínimo vital del demandante.

9. Es más, debe tenerse en cuenta que el artículo 45 del Decreto Ley N.º 19990, modificado por Ley N.º 28678, establece que, excepcionalmente, el pensionista trabajador podrá percibir simultáneamente pensión y remuneración o retribución, cuando la suma de estos conceptos no supere el cincuenta por ciento (50%) de la UIT vigente.
10. En consecuencia, al no haberse probado el fundamento que motivó la suspensión de la pensión del demandante, queda acreditada la vulneración de su derecho al mínimo vital; por lo tanto, corresponde ordenar la restitución de su pensión desde la fecha en que se cometió el agravio constitucional, y el abono de las pensiones devengadas, con sus respectivos intereses legales, conforme lo señala el artículo 1246 del Código Civil.
11. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho al mínimo vital del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, ordenar que dicha entidad asuma el pago de los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la demanda de amparo de autos, en consecuencia **NULAS** la Resolución N.º 0000054763-2004-ONP/DC/DL 19990 y la notificación de fecha 26 de octubre de 2004.
2. Ordenar a la emplazada que restituya al demandante el pago de su pensión de jubilación desde el mes de agosto de 2004 y se le abonen los reintegros generados como consecuencia de la suspensión, más los intereses legales y los costos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**ALVA ORLANDINI
GARCÍA TOMA
VERGARA GOTELLI**

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)

15